



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Informe Firma Conjunta Transferible

Número: IF-2025-108757768-APN-VOCVII#TFN

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 30 de Septiembre de 2025

Referencia: Expediente N° 31.612-I, caratulado “GARCIA RIVERO JULIO GUSTAVO”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación) y Claudio Luis (Vocal de la 8° Nominación) a fin de sentenciar en el expediente N° 31.612-I, caratulado “**GARCIA RIVERO JULIO GUSTAVO s/apelacion**”

La Dra. Marmillon dijo:

I.- Que a fs. 78/99 vta. el Sr Julio Gustavo García Rivero interpone recurso de apelación contra las resoluciones Nros. 52 y 53, ambas de fecha 31/3/2008, dictadas por la Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI, que determinan de oficio los impuestos a las ganancias y de emergencia a las altas rentas del período fiscal 1999, con más intereses resarcitorios y se aplican sendas multas equivalentes al 80% de los tributos presuntamente omitidos, con sustento en el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).

Relata el recurrente que durante muchos años se desempeñó como empleado de la empresa Petrolera Argentina San Jorge S.A., cuyos dos accionistas Sres. Raquel Emilse Oddone de Ostry y Norberto Priú, detentaban cada uno el 50% del paquete accionario, y en el año 1999 decidieron vender la totalidad de sus tenencias accionarias a la firma internacional Chevron Canadá Resources Ltda., contratando a la firma internacional J. P. Morgan Securities para la gestión de la operación.

Puntualiza que al recibir el precio de la operación de venta, los citados accionistas decidieron con ánimo altruista donar importantes sumas de dinero a sus hijos, a su hijo político y a amistades generadas a lo largo de los años, formalizando esas liberalidades a través de contratos de donación celebrados directamente con cada uno de los beneficiarios.

Aclara que en los contratos de donación que lo tienen por beneficiario, consta expresamente que las sumas puestas a su disposición no remuneran ni retribuyen ninguna tarea, ni recompensan ninguna acción o inacción, como tampoco lo obligan como donatario a la realización de conducta ni contraprestación futura a favor del donante.

Explica que las donaciones se hicieron efectivas a través del depósito de las sumas en una cuenta abierta

en el Bank Boston, a su vez provenientes de una cuenta del exterior de los donantes, en la que el adquirente del paquete accionario de Petrolera Argentina San Jorge S.A. había oportunamente depositado el precio pactado por la venta de las acciones de dicha empresa. Asimismo, deja sentado que exteriorizó las sumas recibidas en concepto de donaciones en la respectiva declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales, atribuyéndoles el carácter de ingresos exentos, en la inteligencia que las liberalidades efectuadas constituyen actos de auténtica gratitud, movidos por la generosidad de los Sres. Oddone de Ostry y Priú.

Expone que la donación que el organismo pretende descalificar como tal y atribuirle el carácter de retribución o gratificación en los términos del art 79 inc b) de la ley de impuesto a las ganancias no fue un pago efectuado por la sociedad sino por sus ex accionistas con fondos propios.

Destaca que durante los años que prestó servicios como empleado en relación de dependencia de Petrolera Argentina San Jorge S.A. y luego al desempeñarse en la firma Chevron San Jorge SRL, en todos los casos en los que recibió gratificaciones por parte de sus empleadores con motivo de su desempeño profesional, tales rentas fueron declaradas practicándose las retenciones respectivas.

Se agravia que el Fisco Nacional considere que dicha operatoria carece de veracidad con fundamento en que los Sres. Oddone de Ostry y Priú realizaron varias donaciones en forma simultánea y concomitante a la venta del paquete accionario, no obstante reconocer dicho organismo que la posibilidad de efectuar liberalidades no encuentra óbice legal alguno.

Advierte que la objeción de la administración fiscal tiene como único argumento el principio de realidad económica, de cuya aplicación a los hechos del caso la lleva a concluir que las donaciones efectuadas eran una gratificación o retribución de honorarios en los términos del inciso f) del artículo 79 de la ley de impuesto a las ganancias.

Remarca que únicamente recibía remuneraciones de Petrolera Argentina San Jorge S.A., las que se encontraban debidamente registradas y sobre las que se practicaron las retenciones correspondientes, y manifiesta que el Fisco no explicó por qué considera que los ex accionistas de la compañía citada debían recompensarlo por las tareas allí desarrolladas, ni tampoco cuáles habrían sido tales servicios -ordinarios o extraordinarios- que justificaran tal pago.

En cuanto al principio de la realidad económica establecido en la ley de rito, aduce que el organismo fiscal no demostró ni simulación, ni abuso de las formas jurídicas, ni fraude de ley, y sin embargo, pretendió desplazar el contrato de locación celebrado por la voluntad de las partes, calificándolo como “recompensa” derivada del trabajo en relación de dependencia, sin satisfacer los requisitos operativos de las normas que intenta aplicar.

En otro orden de ideas, manifiesta que, en todo caso, de haberse tratado de gratificaciones que hubieran sido abonadas por Petrolera Argentina San Jorge S.A., la recaudación para el organismo resultaría neutra, pues lo que sería ganancia gravada para el trabajador tendría como contrapartida la deducción del gasto para la empresa pagadora.

Considera que el exceso en el ejercicio de la potestad calificador de los hechos de parte del Fisco Nacional, implica el debilitamiento del principio de reserva de ley, establecido por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Asimismo, informa que el organismo recaudador ha considerado la improcedencia del dictado de actos determinativos en supuestos análogos al aquí cuestionado, en función de la jurisprudencia que abonaría la postura del apelante.

Opone la excepción de prescripción en relación a las facultades del organismo recaudador para determinar de oficio las obligaciones en los impuestos bajo análisis, como también para imponer sanciones por la presunta omisión del pago de los mismos. Estima que en el caso resulta aplicable el plazo de prescripción quinquenal que prevé el inciso a) del artículo 56 de la ley procedimental, y señala que si bien no se encontraba inscripto en el impuesto a las ganancias tampoco tenía obligación de hacerlo, dado que sus ingresos provenían de una relación de dependencia.

Sostiene que no procede aplicar la prescripción decenal del inciso b) del artículo 56 de la ley de rito, atento que se encontraba inscripto en el impuesto sobre los bienes personales, y que debido a la interdependencia que a su criterio habría entre dicho gravamen y el impuesto a las ganancias, y entre éste último y el impuesto de Emergencias a las Altas Rentas, el Fisco no puede considerarlo como contribuyente no inscripto en el impuesto a las ganancias.

Explica también que el organismo fiscal por un lado impugna el carácter de donación exenta atribuido por su parte en el impuesto a las ganancias a las sumas recibidas de los Sres. Oddone de Ostry y Priú, y por otro, considera que debió inscribirse en el impuesto a las ganancias para liquidar el tributo determinado, exponiendo que la prescripción decenal tendría como único fin dar tiempo a la administración tributaria para localizar e identificar a los contribuyentes remisos.

Se agravia de las multas aplicadas, argumentando que los importes determinados derivan de un disímil criterio del organismo recaudador en cuanto a la calificación de la operatoria realizada, por lo que no puede atribuírsele culpa o negligencia que permita tener por configuradas las infracciones que se le endilgan, por no existir el despliegue de maniobra alguna para disminuir el pago de obligaciones fiscales.

Acompaña prueba documental, ofrece prueba informativa y testimonial, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a la excepción de prescripción opuesta y, subsidiariamente, se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.

II.- Que a fs. 134/152 vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Previo a todo, solicita el rechazo de prescripción opuesta, manifestando que el recurrente debió haber solicitado la inscripción en los tributos bajo análisis y efectuar la liquidación y pago de los mismos por el período fiscal 1999, atento que el empleador no había practicado la retención de la totalidad de los ingresos a cuenta de cuarta categoría, obtenidos en dicho período. Sostiene que no procede en el caso aplicar el plazo de prescripción quinquenal pretendido por el recurrente por el mero hecho de estar inscripto en el impuesto a las ganancias, ya que no existiría interdependencia entre este tributo y el gravamen sobre los bienes personales.

Subsidiariamente, contesta los agravios referidos a la cuestión de fondo. En tal sentido, destaca la simultaneidad entre la mencionada venta del paquete accionario de Petrolera Argentina San Jorge S.A., con las donaciones percibidas por el actor, que constituyen dos hechos capaces de destruir los argumentos esgrimidos por el apelante, por carecer de todo sustento probatorio. Considera que se está en presencia de una simulación con el fin de encubrir una gratificación sujeta a los impuestos aquí cuestionados, desplazándose la figura de donación atribuida por el recurrente como liberalidad exenta de tributación.

Afirma que si bien el contribuyente no tenía una relación de dependencia directa con los supuestos donantes, el criterio fiscal se fundamenta en que los Sres. Oddone de Ostry y Priú eran tenedores de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Petrolera Argentina San Jorge S.A. y contemporáneamente a la venta del paquete accionario, decidieron gratificar al Sr. García Rivero por su compromiso y servicios

prestados como empleado bajo relación de dependencia de la empresa, razón por la que las sumas entregadas a éste último se encontrarían gravadas por los impuestos bajo trato.

Aclara que en autos se constató la omisión de presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y de emergencia a las altas rentas, lo que implica la falta de exteriorización de rentas sujetas a tributación derivadas de las sumas entregadas al recurrente, quién se limitó, sobre la base de meras afirmaciones carentes de sustento normativo, a atribuir a las mismas el carácter de donaciones, en lugar de desvirtuar las acciones del Fisco Nacional, toda vez que en el ejercicio de su derecho de defensa debió acreditar con pruebas suficientes la veracidad de sus dichos, siendo aplicable la regla del “*onus probandi incumbit ei qui dicit*” tal como lo establece el artículo 377 del C.P.C.C.N., lo que no habría ocurrido en autos.

Insiste en que la figura de donación empleada no sería más que una simulación tendiente a enmascarar la entrega de las sumas de dinero al actor como una liberalidad exenta de imposición, mientras que, de acuerdo al principio de realidad económica, constituía una renta gravada en cabeza del apelante, percibida como resultado del reconocimiento de su labor profesional. Asimismo, hace notar que la fiscalización actuante observó que la operatoria descripta precedentemente se repitió en forma generalizada con una significativa cantidad de empleados o prestadores de servicios que trabajaron en Petrolera Argentina San Jorge S.A., en una fecha cercana a la transferencia de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la misma.

Como corolario de la situación expuesta, concluye que existiría una clara intencionalidad por parte de los supuestos donantes de compensar o premiar a sus dependientes indirectos por el compromiso en las labores llevadas a cabo durante los años trabajados en la compañía de la que ambos eran titulares de la totalidad de las acciones, teniendo en mira la posibilidad de eludir la tributación correspondiente, instrumentando las operaciones bajo la figura de una donación celebrada entre personas físicas, a sabiendas del carácter exento reconocido legalmente a estos actos.

Reitera que el Sr. García Rivero debió haber solicitado la inscripción en el impuesto a las ganancias y en el de emergencia a las altas rentas, realizar la liquidación de los tributos correspondientes al año fiscal 1999 y efectuar el pago de los gravámenes en caso de corresponder, en atención a que el empleador (Petrolera Argentina San Jorge S.A.) no había practicado la retención por la totalidad de los ingresos de cuarta categoría obtenidos en dicho período.

Manifiesta que correspondía tomar como un ingreso de cuarta categoría en concepto de gratificación por los servicios prestados en la firma Petrolera San Jorge S.A. -art. 79 inc. b) de la Ley del Impuesto a las Ganancias- la suma recibida bajo la figura de donación, invalidando el carácter exentivo atribuido a la misma por el apelante, en orden a las disposiciones del artículo 2 de la ley de rito.

Por otra parte, solicita la aplicación de los intereses resarcitorios conforme lo establece en el artículo 37 de la ley de rito, dado que el recurrente incumplió las obligaciones a su cargo, argumentando que al no articularse agravio alguno contra las liquidaciones de intereses resarcitorios, los mismos se encuentran firmes y consentidos.

En cuanto a las multas aplicadas, considera que el elemento objetivo del artículo 45 de la ley 11.683 se encuentra configurado al verificarse la omisión de ingresar los saldos de los impuestos a las ganancias y a las altas rentas en su justa medida, mientras que, con relación al elemento subjetivo, la representación fiscal remarca que se configura la infracción a título de culpa y que el actor se ha limitado a efectuar expresiones genéricas, sin respaldo de pruebas conducentes para justificar una exoneración de la sanción.

Se opone a la producción de prueba propuesta por la contraria, deja planteado el caso federal y solicita que

se dicte sentencia rechazando el recurso intentado, así como la excepción de prescripción articulada, y consecuentemente se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.

III.- Que a fs. 158 se dispone tratar la excepción de prescripción opuesta por la actora conjuntamente con la cuestión de fondo.

A fs. 171 punto 2º) se abre la causa a prueba, haciéndose lugar parcialmente a la prueba informativa dirigida a Banco CMF S.A., Standard Bank Argentina S.A., Chevron San Jorge S.R.L., a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y el exhorto dirigido al J P Morgan Chase Bank, encontrándose agregadas las respuestas dadas por los oficiados a fs. 196, 197 y vta., 241/246 y 313/450, respectivamente.

A fs. 455 se clausura el período probatorio. A fs. 465 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “C” y a fs. 485 se ponen a alegar, obrando a fs. 495/507vta y fs. 511/525 los alegatos de bien probado presentados por el recurrente y el Fisco Nacional, respectivamente. Finalmente a fs. 526. pasan los autos para dictar sentencia.

IV.- Que si bien sería procedente tratar previamente la excepción de prescripción opuesta por el recurrente, cabe destacar que la misma se encuentra subordinada a la cuestión de fondo traída a conocimiento de este Tribunal en donde en primer lugar se debe establecer la naturaleza de los actos que originan las resoluciones apeladas para esclarecer si los mismos se encuentran o no alcanzados por los tributos y recién entonces se podría analizar si las facultades del Fisco Nacional se encontraban o no prescriptas. Así lo entendió la Sala V de la Excma Cámara, al resolver en las causas “Zarlenga Gustavo Juan” y “Henderson Gustavo Juan” (sentencias de 8/5/2013 y 31/3/2015 respectivamente) cuestiones sustancialmente análogas

V.- Que ello así, corresponde a este Tribunal dirimir si las sumas recibidas por el recurrente obedecieron a una donación exenta, como dicha parte sostiene o si revistieron el carácter de gratificaciones sujetas a los impuestos determinados por el organismo recaudador,

Según constancia obrante en las actuaciones administrativas acompañadas, el recurrente informa a la fiscalización haber recibido sendas donaciones de parte del Sr. Norberto Priú y de la Sra. Oddone de Ostry, entregándole cada uno de ellos la suma de u\$S 108.034, lo que arroja el importe total de u\$S 216.068, monto que fue exteriorizado en la declaración jurada del Impuesto a los Bienes Personales del año 1999, aportándose copia de los contratos respectivos.

De los instrumentos aludidos, fechados 29 de octubre de 1999, se desprende que: *“La gratuidad del presente acto significa, que la suma y el concepto mencionados en el párrafo anterior, no remuneran ni retribuyen -directa ni indirectamente- ninguna tarea, ni recompensan ninguna acción y/o inacción, como tampoco obligan a El Donatario a ningún tipo de conducta, ni contraprestación futura a favor de [La/El] Donante ni de terceros”* (vide fs. 5 y fs. 6 ant. Cpo. Antecedentes).

El Fisco Nacional manifiesta que las sumas discutidas fueron acreditadas mediante transferencia bancaria en la Caja de Ahorro en dólares del Bank Boston de titularidad del recurrente, de acuerdo a los datos suministrados por dicha entidad bancaria, que a su turno informa que esa operación había tenido como ordenantes a los Sres. Priú y Oddone de Ostry, oportunidad en la que también acompaña constancia correspondiente al “Medio Electrónico de Pagos”, de la que surge la instrucción para destinar esos fondos al Plan de Acreditamiento de Sueldos de Bank Boston (fs. 23 y 26, Cpo. Antecedentes), como asimismo dos notas, una de fecha 14/10/1999 que instruye a la entidad bancaria para que proceda a la aplicación de los fondos al destino antes referido (fs. 27 ant. citados) y la restante del 12/10/1999 con la que se acompaña el listado de aquellas cajas de ahorro, titulares y

montos a ser depositados en cada cuenta refiriéndose a un servicio para los Sres. Priú y Oddone de Ostry (fs. 28/29, ant. referidos).

Habida cuenta del carácter generalizado de las donaciones efectuadas por los mencionados ordenantes a los empleados de Petrolera Argentina San Jorge S.A., el organismo recaudador, con basamento en el principio de la realidad económica receptado en el artículo 2 de la ley 11.683, llega a la conclusión que los actos que se pretendieron hacer valer como donaciones fueron simulados, con la finalidad de disfrazar como liberalidades exentas de tributación, lo que en la realidad de los hechos definió como gratificaciones alcanzadas por la ley de impuesto a las ganancias (art. 79 inc. b) y también gravadas por el impuesto de emergencia a las altas rentas, obtenidas por el Sr. García Rivero en compensación por los servicios prestados a la firma que fuera propiedad del Sr. Priú y la Sra. Oddone de Ostry, con la que el recurrente, luego de que recibiera los fondos mencionados, prosiguió su vínculo laboral en su continuadora Chevron San Jorge S.R.L.

Que ello así, el Fisco Nacional concluye que el Sr. García Rivero debió haber solicitado la inscripción en los gravámenes correspondientes, realizar las liquidaciones por el período fiscal 1999 y efectuar el pago de los mismos, en atención a que el empleador no había practicado la retención por la totalidad de los ingresos de cuarta categoría obtenidos en dicho ejercicio fiscal, de conformidad con el artículo 14, apartado 2), punto B) de la actualmente derogada -pero vigente en el período fiscal 1999- Resolución General -AFIP- 4139.

VI.- Que el artículo 2º de la ley de rito (t.o. 1998 y modif.) establece que: *“Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos”*

De las constancias de la causa surge que el recurrente se desempeñó como empleado en relación de dependencia de Petrolera San Jorge S.A. desde el año 1992 y a la fecha de los actos apelados ocupaba el cargo de Gerente de Reservorio (vide fs. 23/34, Cpo. Principal, Imp. a las ganancias), y que desde el año 1999 hasta el 31/01/2006 fue empleado dependiente de la firma Chevron San Jorge S.R.L., continuadora de la primera. Asimismo en el Informe de Inspección se brinda detalle de los ingresos gravados, exentos y no gravados obtenidos por aquel durante el año 1999, incluyendo los enriquecimientos recibidos a título gratuito, que fueron exteriorizados en la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales.

De ello se deduce que el criterio del fisco para objetar las sumas de dinero recibidas por el actor como donación, puesto de resalto en los actos administrativos cuestionados y en el Informe de Inspección que se agrega a fs. 45/49 de las actuaciones administrativas, (vide Cpo. Principal -Imp. a las Ganancias), está sustentado únicamente por la simultaneidad de la donación que se le efectuara al Sr. García Rivero el 29/10/1999 y la fecha en que los titulares del paquete accionario de la empresa Petrolera San Jorge S.A. concretaran la venta del mismo a Chevron Canadá Resources Limited el 27/9/1999 (fecha consignada a fs. 45 de las citadas actuaciones), y por la circunstancia de que fueron beneficiados con similar liberalidad muchos empleados de la firma.

VII.- Que los indicios reunidos así como los indicios en que se sustentó la pretensión fiscal, no pueden considerarse suficientes para calificar a la donación como un acto simulado, por el solo hecho de que en forma

contemporánea a la venta del paquete accionario de la empresa se hayan instrumentado y efectivizado las donaciones al Sr. García Rivero, como tampoco en la circunstancia de que existieran otros beneficiarios -otros empleados y directivos de la empresa petrolera- de idéntica liberalidad.

Por el contrario, la suscripta considera que la administración fiscal no ha probado en el caso concreto que las partes hayan sometido las donaciones dinerarias a formas o estructuras que no sean manifiestamente aquellas que el derecho privado autorice, teniendo en cuenta que los elementos esgrimidos por el organismo recaudador de manera alguna poseen la precisión, concordancia y la significación inequívoca susceptible de conducir a afirmar que las sumas donadas por los Sres. Oddone de Ostry y Priú al Sr. García Rivero fueron en calidad de contraprestación, pago de un honorario, remuneración o gratificación por un servicio prestado por este último a título oneroso, circunstancia que se imponía a fin de probar el interés que llevó a las partes a realizar el pretendido acto simulado y que no surge de las constancias obrantes en autos.

Asimismo, tanto de la copia de los recibos de haberes obrantes en las actuaciones administrativas (v. fs. 23/34, Cpo. Principal -imp. a las ganancias) así como de la respuesta de Chevron Argentina SRL al oficio librado en autos (v. fs. 234/238), se concluye que de los ingresos del actor en los años 1998 a 2001, las sumas que se consignan en concepto de remuneración mensual o gratificaciones no guardan relación alguna con los importes provenientes de las donaciones efectuadas.

Por tanto, en el caso concreto, se desprende la existencia de elementos que “prima facie” otorgan un razonable sustento y explicación a las donaciones en cuestión y a las demás conductas adoptadas por las partes en torno de la venta de las acciones de Petrolera Argentina San Jorge S.A.

VIII.- Cabe destacar que en idéntico sentido se ha pronunciado este Tribunal en oportunidad de resolver en cuestiones estrictamente análogas a la presente, en las que se discutían las liberalidades dispuestas por las mismas personas - Sres. Oddone de Ostry y Priú- en las causas “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de esta Sala C - anterior composición- del 19/08/2005, que fuera confirmada por la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal por resolución del 24/08/2007), “Marconi Rubén Raúl” (Sala B 20/5/2013), “Henderson Gustavo Ernesto” (Sala D 24/05/2014), entre otras.

IX.-Que en consecuencia, corresponde revocar íntegramente las resoluciones apeladas. Las costas se imponen a la parte vencida.

En atención a la forma en que se resuelve, se torna inoficioso el tratamiento relativo a la prescripción planteada por el recurrente.

El Dr. Luis dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

Por ello, SE RESUELVE:

Revocar íntegramente las resoluciones apeladas. Las costas se imponen a la parte vencida.

Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9a. Nominación (cfr. art. 184, 2do. párrafo, ley 11.683 -t.o. vigente- y art. 52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).

Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.

Digitally signed by Claudio Esteban Luis
Date: 2025.09.30 16:29:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Claudio Esteban Luis
Vocal
Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva
Tribunal Fiscal de la Nación

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.30 17:16:56 -03:00

Viviana Marmillon
Vocal
Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva
Tribunal Fiscal de la Nación